

ALEGACIONES AL BORRADOR DE DECRETO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GALICIA PARA SU ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR.

D. Carlos Romero Paredes, actuando como presidente de la Federación Gallega de Asociaciones Provinciales Empresariales de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Mantenimiento y Afines (FEGAFON), con DNI XXXXXXXX y domicilio a efecto de notificaciones en la Avenida de Martínez Garrido nº84 de Vigo, C.P. 36205, comparezco y digo que por el medio del presente escrito presento alegaciones al borrador de decreto citado.

ALEGACIONES

Fegafon se opone a la derogación de las dos normas autonómicas que regulan el ejercicio profesional de la fontanería en Galicia, en tanto no se apruebe una disposición que las sustituya y que regule las condiciones administrativas que deben cumplir las instalaciones interiores de suministro de agua. Las normas en cuestión son:

- Decreto 42/2008, de 28 de febrero, de creación del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia y autorización de las empresas instaladoras.
- Orde do 13 de abril de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 42/2008, do 28 de febreiro, de creación do Rexistro de Instalacións Interiores de Subministración de Auga de Galicia e a autorización das empresas instaladoras.

La derogación de las mismas supone la completa desregulación del sector, la creación de un vacío legal, y que se impida a los ciudadanos cumplir con obligaciones derivadas de la Ley. Además de la pérdida de empleo que se generará si desaparece la profesión del fontanero y el despertar de la economía sumergida.

En todo caso el cese en el funcionamiento del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia requeriría la modificación de la Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia [Artículo 6.c) y Anexo I inciso 7], lo que no puede hacerse mediante Decreto.

Si bien desde Fegafon coincidimos con la Administración en la necesidad de adaptar la normativa autonómica al nuevo marco jurídico, **nos oponemos a la derogación mientras no se aclare la situación en la que va a quedar la inscripción de las instalaciones y la habilitación de empresas.**

Así mismo queremos expresar nuestra plena disposición a colaborar en la elaboración de aquellas disposiciones legales oportunas relacionadas con los temas tratados en este escrito.

Justificación

Se justifica a continuación la plena necesidad de mantener la inscripción de las instalaciones interiores de suministro de agua y la figura de las empresas instaladoras de agua, si bien se acepta que es preceptivo adaptar su funcionamiento al nuevo marco jurídico creado por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (1).

En lo relativo al registro de instalaciones interiores de suministro de agua de Galicia, si bien su funcionamiento se regula mediante el Decreto 42/2008 (2), su necesidad dimana de la propia Ley 9/2004 (3), tal y como se reconoce en el propio preámbulo del Decreto, en la que se establece la obligación de comunicar la puesta en servicio de las instalaciones interiores de suministro agua.

La derogación del Decreto 42/2008 (2) sin que previamente se haya fijado el funcionamiento de un nuevo registro de instalaciones interiores de agua crea una situación de inseguridad jurídica en la que concurren la desapoderación de la administración a favor de las empresas suministradoras, y el incumplimiento de preceptos legislativos incluidos en una Ley autonómica provocado por una disposición derogatoria contenida en una disposición de rango inferior.

Mantener la derogación supone impedir al titular cumplir con su obligación de comunicación a la administración de la existencia de la instalación antes de su puesta en servicio, y privar a la propia administración de uno de sus medios más eficaces, previsto en la Ley, para el control de la Seguridad Industrial en Galicia.

Desde el punto de vista social, la derogación del Decreto 42/2008 (2) supone de facto una desapoderación de la administración a favor de las empresas suministradoras de agua, que podrán dejar de solicitar la documentación de comunicación de las instalaciones, y que no estarán obligadas a comprobar la idoneidad técnica de las mismas, dando lugar a una situación de indefensión de los titulares de las instalaciones frente a los intereses mercantiles de empresas suministradoras e instaladoras.

En lo que respecta a la existencia de las empresas instaladoras de agua está justificado por una razón imperiosa de interés general y es el mecanismo de control más proporcionado para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y el resarcimiento de los daños derivados de la responsabilidad civil de las empresas instaladoras.

Así, aun en ausencia de un reglamento técnico de seguridad industrial que regule la profesión de fontanero, resulta evidente que la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones de agua cuenta con sustantividad propia dentro del ordenamiento jurídico español. La normativa obliga a los titulares de establecimientos públicos a poner a la disposición del público agua apta para el consumo, y a los propietarios de locales privados a que sus instalaciones interiores no modifiquen la calidad del agua.

El avanzado estado de la técnica imposibilita que los titulares o propietarios de los locales actúen como garantes de que sus instalaciones cumplen con las normativas higiénico – sanitarias como el R.D. 140/2003 (4), el R.D. 865/2003 (5) y las secciones HS 4 y HS 5 del Documento Básico HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación (6).

En este contexto parece que lo más proporcionado para proteger a los usuarios es que la empresa que ejecuta la instalación declare responsablemente que conoce la normativa de aplicación y que cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre sus actuaciones, suponiendo este acto su inscripción en el registro de empresas instaladoras habilitadas.

La existencia de este registro no es incompatible con la prestación de servicios en el marco de la Ley 17/2009 (1), y así lo entienden otras comunidades autónomas, dado que se puede

establecer que el mismo no supone la existencia de un régimen de autorización, sino de comunicación previa.

Así la Ley 17/2009 contempla en su artículo 21 que se podrá exigir a los prestadores de servicios, en una norma con rango de ley, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio.

Para el caso de las empresas instaladoras de agua la exigencia de responder civilmente de sus actuaciones aparece en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (7).

A continuación se citan aquellos aspectos de la normativa aplicable más relevantes para justificar el mantenimiento del registro previo de las instalaciones de agua y la regulación de la habilitación de las empresas instaladoras de agua:

1. De acuerdo con el inciso 2.d) del Artículo 1 de la Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia (3) las instalaciones interiores de suministro de agua deben considerarse en el ámbito de aplicación de la citada ley, tal y como se indica en el preámbulo del Decreto 42/2008 (2).
2. El apartado 2.c) del artículo 5 de la Ley 9/2004 (3) fija como uno de los mecanismos para el control de la seguridad industrial en Galicia la inscripción de las instalaciones en registros industriales especiales, como el caso del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia.
3. El artículo 6 de la Ley 9/2004 (3) en su apartado b) establece que las instalaciones relacionadas en el Anexo I de la citada ley requieren para su puesta en funcionamiento una comunicación simple al órgano competente en materia de industria. En el punto 7 del Anexo I se citan todas las instalaciones interiores de agua, con independencia de su capacidad.
4. El artículo 9 de la Ley 9/2004 (3) establece la obligación de proyectar, ejecutar, utilizar y mantener las instalaciones de modo que se garantice la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, con arreglo a la normativa vigente que les sea de aplicación.
5. El artículo 33 de la Ley 9/2004 (3), en su apartado 3.a) tipifica como infracción grave la instalación o utilización de productos, aparatos o elementos sujetos a la seguridad industrial sin cumplir con las normas reglamentarias.
6. El artículo 33 de la Ley 9/2004 (3), en su apartado 4.b) tipifica como infracción leve la puesta en funcionamiento de instalaciones sin haberlo comunicado con carácter previo al órgano competente en materia de industria cuando dicha comunicación sea preceptiva.
7. El artículo 36 de la Ley 9/2004 (3) establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados al objeto de restaurar y reponer los bienes alterados a su estado anterior.
8. El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (8) establece en su apartado 5, que los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se

aprobarán por el Gobierno de la Nación, **sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.**

9. El artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (7) establece como requisitos básicos de la edificación la higiene, salud y protección del medio ambiente, indicando que el Código Técnico de la Edificación fijará las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.
10. El artículo 17 de la Ley 38/1999 (7) establece que las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación **responderán civilmente**, frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad en un plazo de tres años contado desde la fecha de recepción de la obra.

Este mismo artículo establece que cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, **sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.**

11. El artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (9) establece que el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización.
12. El artículo 4 del Real Decreto 140/2003 (4) establece que los propietarios de los inmuebles de carácter privado son responsables de mantener la instalación Interior a efectos de evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo, y que Los titulares establecimientos comerciales o públicos deberán poner a disposición de sus usuarios agua apta para el consumo.

Referencias normativas

- (1) Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE nº 283, 24-Nov-2009)
- (2) Decreto 42/2008, de 28 de febrero, de creación del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia y autorización de las empresas instaladoras. (DOG nº52, 13 de marzo 2008)
- (3) Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia (BOE nº 230, 23 de septiembre de 2004) (DOG nº 166, 26 de agosto de 2004)
- (4) REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE número 45 de 21/2/2003).
- (5) REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE número 171 de 18/7/2003).

- (6) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE número 74 de 28/3/2006).
- (7) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266, 6-Nov-1999)
- (8) Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, 23-Jul-1992)
- (9) Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (BOE nº 250, 17-Oct-1980)